

Observatorio de la Conflictividad Social y la Gobernabilidad Democrática

Centro de
Documentación
de Honduras

Introducción

Este es el segundo informe que presenta el Observatorio del Centro de Documentación de Honduras en torno al estado de la conflictividad social y su repercusión sobre los niveles de gobernabilidad democrática en Honduras, durante el presente año 2007.

El primer informe cubrió el periodo comprendido entre los meses de enero y abril. Este informe abarca el periodo que va del mes de mayo hasta finales del mes de agosto. En total, a través de los dos informes, el Observatorio del CEDOH ha cubierto ya ocho meses del presente año, dando seguimiento y haciendo evaluación constante de los distintos problemas, conflictos y crisis sociales que han tenido lugar en nuestro país.

Durante el periodo objeto del presente informe, la conflictividad social mantuvo niveles similares a los del periodo anterior, aunque aumentó un tanto el número de conflictos registrados. Sus áreas de manifestación fueron muy similares y los distintos tipos de conflictos se mantuvieron igualmente presentes en el escenario nacional. Puede afirmarse que la conflictividad social en el país mantiene una línea más o menos constante de

manifestación y sólo ocasionalmente muestra alteraciones bruscas y elevaciones súbitas.

Sin embargo, a finales del periodo analizado en este informe, el país, por enésima vez, fue víctima de la naturaleza, sufriendo amenazas de huracanes, tormentas copiosas, inundaciones diversas y hasta temblores de tierra, que causaron severos daños materiales y ocasionaron muerte (siete personas han sido reportadas como víctimas fatales) y destrucción en varios departamentos y regiones del país.

Tal como enseña la experiencia acumulada, las consecuencias de estos desastres naturales tienen casi de inmediato una repercusión directa sobre la conflictividad social, generando mayores demandas y nuevas situaciones de confrontación y disputa en torno a los escasos recursos, los espacios compartidos y los esfuerzos por recuperar antiguas posiciones o mejorar las ya conquistadas. Los damnificados se convierten, a veces sin darse cuenta ellos mismos, en actores de nuevos problemas sociales y partes beligerantes en la lucha por restablecer los bienes perdidos y reconstruir nuevamente sus atormentadas

vidas. Los agricultores pierden sus cosechas y ven limitada su capacidad para pagar las deudas en los bancos. Las zonas de riesgo se vuelven espacios de confrontación entre las autoridades y los pobladores que ansían retornar a sus antiguas viviendas. Se incrementa el desempleo en las zonas afectadas y crecen los índices de inseguridad y delincuencia.

En fin, no hay desastre natural sin sus correspondientes consecuencias sociales. Esas son las lecciones que nos dejaron huracanes como el Fifi en 1974 y el terrible Mitch en 1998. En esta ocasión, aunque el huracán Félix no golpeó al país con la fuerza y violencia que se esperaba y temía, no hay duda que las lluvias e inundaciones posteriores han causado suficientes daños como para esperar las debidas consecuencias en los niveles de conflictividad social en el país.

Seguramente el próximo informe de nuestro Observatorio, el tercero y último de este año 2007, que cubrirá los meses de septiembre a diciembre, habrá de revelar las variaciones en los índices de la conflictividad social en todo el territorio nacional.

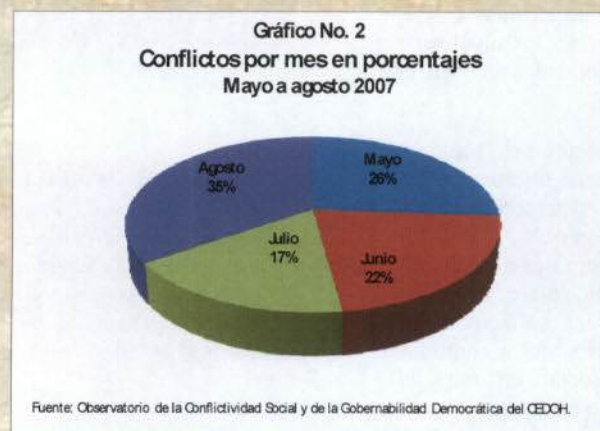
La frecuencia de muchos de los conflictos registrados, su persistencia en el tiempo y en el espacio, así como la tendencia muy marcada a ampliar sus áreas de manifestación y radicalizar sus métodos de manifestación, son, una vez más, prueba evidente de que el Estado hondureño todavía no ha sido capaz de diseñar y poner en práctica una adecuada política de prevención y manejo pacífico de la conflictividad social, generando espacios suficientes, instancias institucionales y habilidades y destrezas políticas apropiadas para la búsqueda de soluciones negociadas y la resolución pacífica de las confrontaciones sociales. Es un déficit de gestión importante, que pesa mucho en la capacidad negociadora del Estado y limita sus posibilidades para procesar los conflictos y darles el adecuado manejo democrático que requieren.

Esta publicación es posible gracias al apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI).

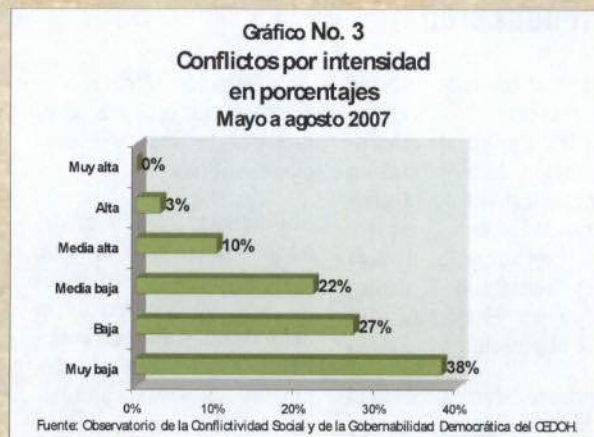


Los conflictos sociales van en aumento. Si en el primer informe registramos 86 de diverso tipo en todo el país, en este segundo periodo analizado (meses de mayo a agosto) los conflictos involucrados suman 92, seis más que en el periodo anterior. Quizás la cifra no sea tan impresionante pero, de todas maneras, muestra un crecimiento que debe ser tomado en cuenta para fines de comparación y análisis. Refleja, en esencia, que hay un estado latente de conflictividad social que se mantiene y, ocasionalmente, tiende a crecer, no a retroceder. Por otro lado, al valorar, más adelante, la tipología de los conflictos y la intensidad de los mismos, podremos comprobar que ha aumentado el nivel de la tensión social y, por consiguiente, el de la crispación socio-política en general.

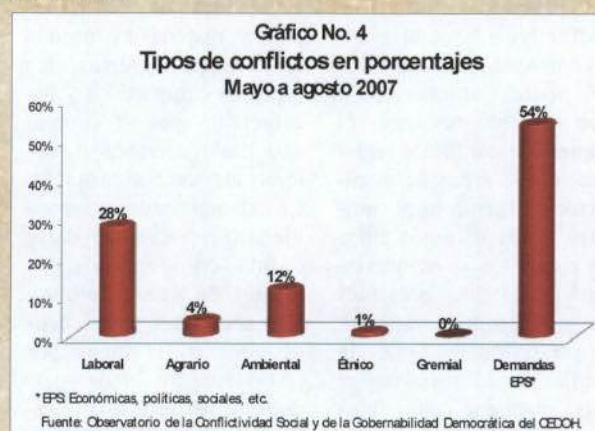
La mayor incidencia de conflictividad se produjo en el mes de agosto, que registró 32 del total de los 92 conflictos del periodo, es decir el 35 %. Esto no es casual. Fue en agosto cuando se produjeron las marchas convocadas por las organizaciones populares para protestar contra las políticas gubernamentales en todo el territorio nacional. Y fue en ese mismo mes en que, como efecto de las marchas nacionales, se derivaron diversos actos de confrontación y choque en distintos escenarios regionales y locales.



Los espacios en los que se han producido estos 92 conflictos registrados, los denominados “ámbitos de conflictividad social”, son muy similares a los descritos en el primer informe. No se advierten variaciones sustanciales en este campo, lo que evidencia un cierto estancamiento en los niveles de la conflictividad, que se concentra en determinadas áreas sin que los actores involucrados muestren capacidad efectiva para avanzar en la búsqueda de soluciones negociadas que permitan despejar esas áreas saturadas de conflictividad social.



Las demandas en torno a la ejecución transparente y descentralizada de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP) dominaron gran parte de los escenarios de la conflictividad social. Junto a los reclamos por la instalación o el mejor funcionamiento de los servicios básicos, las exigencias para agilizar los desembolsos de los fondos asignados a las alcaldías en el marco de la ERP fueron las demandas más constantes y reiteradas en el periodo analizado. Da la impresión que la ERP, concebida inicialmente como el instrumento más apropiado para aliviar y reducir los altos índices de pobreza, poco a poco se ha ido convirtiendo en una fuente creciente de problemas y conflictos. Su lenta ejecución, lo laborioso de sus trámites internos, la absurda tendencia a reglamentar hasta el mínimo detalle de su funcionamiento, han convertido a la ERP en un programa fallido, generador de problemas más que de soluciones.

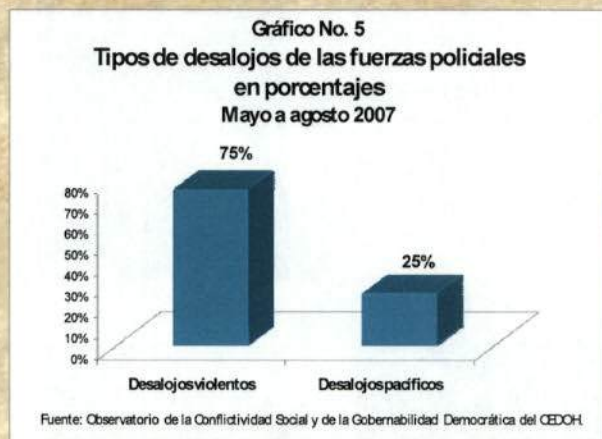


Como en el periodo anterior, los espacios geográficos en los que se ha manifestado el conjunto de conflictos sociales analizados en el presente informe siguen siendo, en lo fundamental, los mismos del periodo analizado en el primer informe.

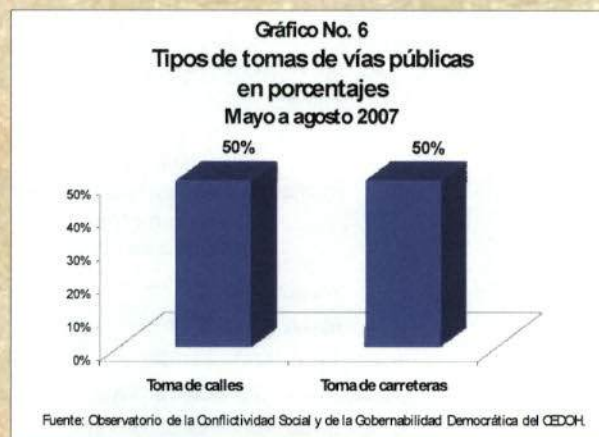
El departamento de Francisco Morazán aparece como el más conflictivo socialmente. En sus espacios concentra el 51% de todos los conflictos que han tenido lugar entre mayo y agosto, seguido por el departamento de Cortés que acumuló el 30% de los conflictos en ese mismo periodo. En la zona de occidente destacan los departamentos de Santa Bárbara, La Paz e Intibucá como escenarios privilegiados en los ámbitos de conflictividad, seguidos por Choluteca en la zona sur, El Paraíso y Olancho en la región centro/oriental, Colón, Atlántida y Yoro en la zona norte.

Como ya es normal, muchos de estos conflictos, originados en la periferia, convergen en sus formas de manifestación en la zona central del país, en búsqueda de la atención política, gubernamental y mediática en la ciudad capital. Así se explica el mayor número de conflictos registrados en el departamento de Francisco Morazán, aunque es preciso señalar que en los municipios más pobres del departamento, especialmente en el sector sur, también se generan conflictos de diverso tipo con su dinámica propia.

Las “tomas” de instalaciones y oficinas, especialmente públicas, y la interrupción del tráfico en las principales calles y carreteras del país, siguen siendo las formas más comunes y constantes de protesta y manifestación de los conflictos.



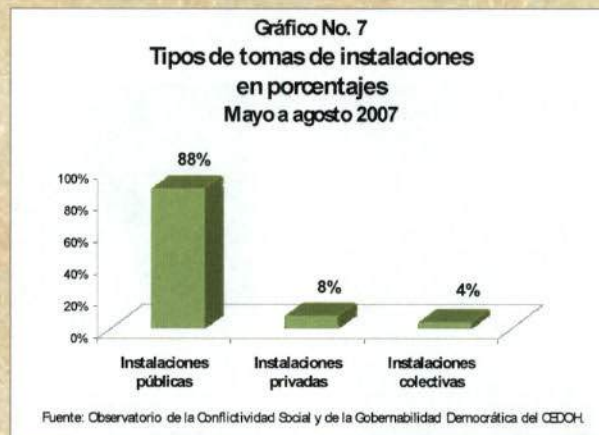
La evidente debilidad de las instituciones, su deficiente desempeño y la ausencia de una política estatal de manejo de la conflictividad social, hacen que los actores involucrados en calidad de demandantes prefieran las vías de hecho, rechazando las formas legales e institucionales de reclamo. Cada vez son más frecuentes estas “formas de lucha” y, al mismo tiempo, cada vez son más frecuentes los desalojos realizados por las fuerzas policiales, tanto los de carácter violento (75%) como los pacíficos (25%).



Las protestas en contra de la irracional explotación de los bosques o de los recursos minerales, así como las demandas por elevar las tarifas del transporte urbano son las que con mayor frecuencia se expresan a través de las “tomas” de carreteras y vías públicas. Entre mayo y agosto las “tomas” de vías públicas se dividieron al 50% por igual entre “tomas” de carreteras y “tomas” de calles.

Las “tomas” por la fuerza de instalaciones y oficinas públicas constituyeron el 88 % de todas las “tomas” similares ocurridas en el periodo. El restante 12 % se distribuye entre tomas de instalaciones privadas (fábricas, centros de trabajo, predios rurales o urbanos, etc.) que sumaron el 8 % y las “tomas” de instalaciones colectivas (sedes sindicales, cooperativas, etc.) que abarcaron el 4 % final.

La ya famosa modalidad de las “asambleas informativas”, institucionalizada por los dirigentes magisteriales pero imitada y reproducida con mucha frecuencia al interior de las organizaciones sindicales, es una forma de suspender las labores, interrumpir las jornadas de trabajo y generar paros laborales.



Las antiguas formas tradicionales de conflictividad – invasiones de tierras, huelgas prolongadas, etc. – poco a poco van desapareciendo y en su lugar surgen formas más novedosas y originales de manifestación social. En la medida que se diversifica el número de actores y se multiplican los ámbitos de la conflictividad, en esa misma medida se amplían y modifican las formas de expresión y los canales de manifestación de los conflictos sociales.



A pesar del incremento en el número e intensidad de los conflictos en este segundo periodo, los niveles de la gobernabilidad política no han sido sustancialmente alterados ni se han visto en una situación de crisis real. El momento de mayor tensión y crispación política se vivió en el mes de agosto, cuando un conjunto de organizaciones sociales – Bloque Popular, Coordinadora de la Resistencia Popular, Colegios magisteriales, Comité coordinador de organizaciones campesinas, etc. - convocó a dos días de protesta nacional en contra de las políticas oficiales. Las acciones de desalojo adquirieron carácter violento en algunas ocasiones y las jornadas de protesta se saldaron con la muerte trágica de un maestro, asesinado por un ciudadano indignado que intentaba romper el cerco que le impedía avanzar por la carretera de occidente.

El resto de conflictos sociales aquí analizados, aunque importantes en su gran mayoría, no han tenido la fuerza suficiente ni el impacto político necesario para alterar los normales niveles de gobernabilidad democrática que prevalecen en el país. Sin embargo, es preocupante el incremento en el número de conflictos y su gradual acumulación en determinados ámbitos, una situación que, más adelante, podría llegar a comprometer más a fondo la estabilidad política del gobierno y de la sociedad en general.

Centro de Documentación de Honduras

Colonia Tres Caminos,
 avenida principal, casa
 #2626, Tegucigalpa,
 Honduras

Teléfono: 504-232-3265
 Fax: 504-232-3708
 Correo:
 info@cedoh.org

Otras publicaciones del CEDOH

